



Diario de Debates

Tercera Época • Tomo I • 1º Periodo Ordinario • Morelia, Michoacán • noviembre de 2024.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Dip. Ma. Fabiola Alanís Sámano

Presidencia

Dip. Sandra María Arreola Ruiz

Integrante

Dip. Teresita de Jesús Herrera Maldonado

Integrante

Dip. Guillermo Valencia Reyes

Integrante

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

Integrante

Dip. J. Reyes Galindo Pedraza

Integrante

Dip. Marco Polo Aguirre Chávez

Integrante

Dip. Octavio Ocampo Córdova

Integrante

Dip. Juan Antonio Magaña de la Mora

Integrante

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Mtro. Fernando Chagolla Cortés

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Lic. Adela Paulina Bucio Mendoza

Director General de Servicios de

Apoyo Parlamentario

Lic. Salvador García Palafox

Coordinadora de Biblioteca, Archivo

y Asuntos Editoriales

Lic. David Esaú Rodríguez García

Jefe del Departamento de Asuntos Editoriales

El DIARIO DE DEBATES es una publicación elaborada por el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES: *Corrector de Estilo*: **Juan Manuel Ferreyra Cerriteño**. *Formación, Reporte y Captura de Sesiones*: Gerardo García López, Juan Arturo Martínez Ávila, María del Socorro Barrera Franco, Mónica Ivonne Sánchez Domínguez, Moises Cruz Fonseca, Nadia Montero García Rojas, Paola Orozco Rubalcava, Perla Villaseñor Cuevas, Victor Iván Reyes Mota, Itzel Arias Martínez, Alejandro Solorzano Álvarez.

www.congresomich.gob.mx

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SEPTUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

Versión Estenográfica Sesión Número 023

[Extraordinaria]

Mesa Directiva:

Dip. Juan Antonio Magaña de la Mora [PVEM]

Presidente

Dip. Juan Carlos Barragán Vélez [MORENA]

Vicepresidente

Dip. Vicente Gómez Núñez [MORENA]

Primera Secretaría

Dip. Belinda Iturbide Díaz [MORENA]

Segunda Secretaría

Dip. Ana Vanessa Caratachea Sánchez [PAN]

Tercera Secretaría

LUGAR: Morelia, Michoacán.

FECHA: 7 de noviembre de 2024.

RECINTO: Palacio del Poder Legislativo.

APERTURA: 13:49 horas.

Presidente:

Septuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Primer Año Legislativo. Sesión extraordinaria del día jueves 7 de noviembre del año 2024. [Timbre]

Se instruye a la Segunda Secretaría pasar lista de asistencia a efecto de informar a esta Presidencia la existencia del quórum para poder celebrar la sesión convocada.

Segunda Secretaría:

Se atiende la instrucción, Presidente:

Aguirre Chávez Marco Polo, Aguilar Mercado Grecia Jennifer, Alanís Sámano María Fabiola, la de la voz [Albavera Padilla Melba Edeyanira], Arreola Ruiz Sandra María, Arévalo Vera Alejandro Iván, Arroyo Martínez Brissa Ileri, Anaya Orozco Alfredo, Avilés Osorio Jaqueline, Barragán Vélez Juan Carlos, Bautista Tafolla Carlos Alejandro, Bugarini Torres Giulianna, Camacho Zapiaín María Itzé, Campos Huirache Adriana, Caratachea Sánchez Ana Vanessa, Celis Silva Juan Pablo, Chávez Andrade Alfonso Janitzio, Espinoza Mercado Diana Mariel, Espinoza Villa Abraham, Franco Carrizales Anabet, Gaona García Baltazar, Galindo Pedraza J. Reyes, Garibay Esquivel Sandra Olimpia, Gómez Núñez Vicente, Herrera Maldonado Teresita de Jesús, Hurtado Marín Ana Belinda, Iturbide Díaz Belinda, Isauro Hernández Eréndira, Manríquez González Víctor Manuel, Martínez Gowman David, Magaña de la Mora Juan Antonio, Mendoza Torres Antonio Salvador, Ocampo Córdova Octavio, Paz Torres Conrado, Pedraza Huerta Nalleli Julieta, Rangel Vargas Hugo Ernesto, Rivera Camacho Emma, Ruiz González Xóchitl Gabriela, Salas Valencia José Antonio, Sánchez Bautista Santiago.

¿Alguien más faltó de pasar lista?...

Le informo, Presidente, que existe el quórum legal para iniciar la sesión extraordinaria convocada.

Atendida su instrucción.

Presidente:

Habiendo el quórum, se declara abierta la sesión extraordinaria.

Se pide a la Primera Secretaría dar cuenta al Pleno del orden del día.

Primera Secretaría:

Con su permiso, Presidente:

Sesión extraordinaria del día
jueves 7 de noviembre del año 2024.

Orden del Día:

Único. *Primera lectura, dispensa de su segunda lectura, discusión y votación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 24; la fracción XXIII A del artículo 44; el inciso c) de la fracción II del artículo 50; el artículo 70; la denominación de la Sección I, del Capítulo I, del Título Tercero A; el artículo 95; el cuarto párrafo del artículo 97; el primero y segundo párrafos del artículo 109; el artículo 109 bis; la fracción I del artículo 109 ter; último párrafo del artículo 133; tercero y sexto párrafos de la fracción V, y la fracción VII, del artículo 134; todos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia.*

Es cuanto, Presidente.

Presidente:

Está a consideración del Pleno el orden del día, por lo que se somete para su aprobación en votación económica.

Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano... Pido a la Segunda Secretaría dar cuenta con la votación... Mantengan la mano, por favor... Gracias.

¿Votos en contra?...

¿Abstenciones?...

Segunda Secretaría:

Le informo, Presidente: Treinta y seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Atendida su instrucción.

Presidente:

Muchas gracias.

EN ATENCIÓN DEL ÚNICO PUNTO del orden del día, se pide a la Tercera Secretaría dar primera lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 24; la fracción XXIII A del artículo 44; el inciso c) de la fracción

II del artículo 50; el artículo 70; la denominación de la Sección I, del Capítulo I, del Título Tercero A; el artículo 95; el cuarto párrafo del artículo 97; el primero y segundo párrafos del artículo 109; el artículo 109 bis; la fracción I del artículo 109 ter; último párrafo del artículo 133; tercero y sexto párrafos de la fracción V, y la fracción VII, del artículo 134; todos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Tercera Secretaría:

Con su permiso, Presidente:

HONORABLE ASAMBLEA

Las comisiones de Puntos Constitucionales; y de Justicia, de la Septuagésima Sexta Legislatura, con fundamento en los artículos 44 fracción I y 164 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; artículos 64 fracción I, 85 fracciones III y VI y 89 fracción IV de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, someten a consideración de esta Soberanía el presente Dictamen, bajo las siguiente

METODOLOGÍA

Las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Justicia, encargadas del análisis, estudio y dictamen de la Iniciativa turnada, comenzaron los trabajos pertinentes conforme al procedimiento que a continuación se detalla:

I. Dentro del apartado denominado **Antecedentes**, se da cuenta de la Iniciativa que origina el presente dictamen, así mismo del proceso legislativo correspondiente.

II. Dentro del apartado **Contenido de la Iniciativa**, se describe el contenido de la Iniciativa que se dictamina, señalando los objetivos, motivos y alcances.

III. Dentro del apartado de Consideraciones, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, refieren los fundamentos y razonamientos respectivos a la propuesta legislativa referida, señalando el sentido del presente dictamen.

IV. En este orden, el **Resultado del Dictamen** se refiere a la conclusión del proyecto de Dictamen de las Comisión de Puntos Constitucionales; y de Justicia; respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción II del artículo 24; la fracción XXIII A del artículo 44; el inciso c) de la fracción II, del artículo 50; el artículo 70; la denominación de la Sección I, del Capítulo I, del Título Tercero A; el artículo 95; el cuarto párrafo del artículo 97; el primero y segundo párrafos del artículo 109; el artículo 109 bis; la fracción I del artículo 109 ter; último párrafo del artículo 133; tercero y sexto párrafos de la fracción V, y la fracción VII del artículo 134,

todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; asimismo, se hace la comparativa de la normativa vigente con la propuesta realizada por estas Comisiones Dictaminadoras.

V. Como último punto, se indica lo referido al **Texto Constitucional y Régimen Transitorio**, donde se expone el Proyecto de Decreto, su texto normativo y transitorio.

I. Antecedentes

Primero. En Sesión de Pleno de fecha 17 diecisiete de octubre de 2024 dos mil veinticuatro, dentro del Primer Año Legislativo, se dio cuenta de la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, presentada por el Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales para análisis y Dictamen de Si Ha Lugar para Admitir a Discusión.

Segundo. En Sesión Extraordinaria de Pleno del 31 treinta de octubre de dos mil veinticuatro 2024, se turnó el Acuerdo Número 34 por el que se Declara Ha lugar a Admitir a Discusión, Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso turno la Iniciativa de mérito a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Justicia; para análisis y Dictamen.

II. Contenido de la Iniciativa

Para la elaboración del presente Dictamen, se transcribe la parte más relevante de la Iniciativa presentada por el Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro de su exposición de motivos, se fundamenta en lo siguiente:

...Con la reforma a la Justicia Administrativa se pretende incluir mecanismos claros para combatir la corrupción y la opacidad dentro del tribunal, procedimientos de control y medidas de transparencia que ayuden a crear un ambiente más confiable y abierto.

Para garantizar que exista un verdadero Tribunal Administrativo en Michoacán, debemos enfocarnos en mejorar la transparencia, reducir la corrupción y garantizar procesos más justos y rápidos, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el Sistema de Justicia, ya que cuando los ciudadanos perciben que el Sistema Judicial es eficaz y equitativo, la legitimidad de las instituciones del Estado se refuerza.

El aumento en la cantidad y complejidad de los casos administrativos ha llevado a la necesidad de contar con tribunales más especializados. Por ello, esta Iniciativa pretende eliminar las divisiones dentro del Tribunal de Justicia Administrativa y la sobrecarga de trabajo de las áreas específicas, haciendo más equitativa la distribución de las

cargas laborales, lo cual aumentaría la calidad y profundidad de las resoluciones.

Lo anterior es así, ya que uno de los compromisos primordiales, es en todo momento, que el Sistema de Justicia Administrativa garantice el acceso a la justicia que mandata el artículo 17 de nuestra Carta Magna, y que la misma resulte ser completa, imparcial, pronta y expedita.

Asimismo, en aras de garantizar la legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica, agilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y buena fe de los procedimientos y procesos jurisdiccionales administrativos, es que se presenta la presente reforma al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, a efecto de que se cree un nuevo Tribunal, con nuevas visiones y objetivos y que comprenda una normativa, que fortalezca a los propios impartidores de justicia, para que se generen las condiciones adecuadas a los justiciables.

En ese sentido, se propone la conformación de un nuevo órgano jurisdiccional, denominado “Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo”, en el que en todo momento se prevea lo necesario para que los justiciables cuenten con los procedimiento, medios, Jueces y Magistrados que garanticen continuar con la labor jurisdiccional sin que la misma sea interrumpida.

Por ello, la relevancia de la presente reforma no sólo radica en la nueva integración y conformación del nuevo Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, sino en dotarlo de nuevas competencias y funcionalidades que le permitan una nueva conformación, y que le permitan compensar las cargas de trabajo al interior del mismo.

Así, ante la evolución de las necesidades y el crecimiento del Sistema de Justicia Administrativa en el Estado, es que se presenta esta Iniciativa con el propósito de fortalecer y mejorar el funcionamiento, las atribuciones y de garantizar en todo momento a los justiciables su Derecho Humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, la presente Iniciativa pretende establecer una mayor funcionalidad del órgano, dotando a las magistradas y magistrados para que atiendan materia de anticorrupción, no sólo de facultades específicas en dicha materia por lo que ve a faltas graves, sino incrementando su campo de jurisdicción al juicio administrativo, para que puedan conocer, substanciar y resolver aquellos medios de impugnación o juicios administrativos que se promuevan por la imposición de sanciones de faltas no graves, en los procedimientos de responsabilidades administrativas tramitados ante los órganos administrativos.

Además, para ser congruentes con lo señalado en líneas anteriores, se propone que los magistrados del nuevo Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, duren en su encargo nueve años, con lo cual se garantiza la estabilidad y el compromiso con la ciudadanía, de cumplir con todas sus atribuciones de manera eficiente.

Finalmente podemos asegurar que, en el proceso de creación del nuevo Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, se garantizarán no solo los derechos humanos de los servidores públicos que dejarán los cargos, sino además todos los derechos laborales de las personas trabajadoras serán respetados en su totalidad.

[...]

En este sentido, se hará una comparación de la Iniciativa, con el texto de la Constitución Local vigente:

<p>Artículo 24.- No podrán ser electos diputados:</p> <p>I.- ...</p> <p>II.- Los funcionarios de la Federación, los titulares de las dependencias básicas y de las entidades de la organización administrativa del Ejecutivo y los ayuntamientos, los Consejeros del Poder Judicial, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Justicia Administrativa;</p> <p>De la III a la VI. ...</p>	<p>Artículo 24.- No podrán ser electos diputados:</p> <p>I.- ...</p> <p>II.- Los funcionarios de la Federación, los titulares de las dependencias básicas y de las entidades de la organización administrativa del Ejecutivo y los ayuntamientos, los consejeros del Poder Judicial, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa;</p> <p>De la III. a la VI. ...</p>
<p>Artículo 44.- Son facultades del Congreso:</p> <p>De la I a la XXIII bis. ...</p> <p>XXIII A.- Elegir, reelegir y privar del encargo, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos;</p> <p>De la XXIII-B a la XLI. ...</p>	<p>Artículo 44.- Son facultades del Congreso:</p> <p>De la I. a la XXIII bis. ...</p> <p>XXIII A. Elegir, reelegir y destituir del encargo, a las magistradas y magistrados del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, y aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos;</p> <p>De la XXIII-B. a la XLI. ...</p>
<p>Artículo 50.- No pueden desempeñar el cargo de Gobernador:</p> <p>I. ...</p> <p>II. ...</p> <p>a) ...</p> <p>b) ...</p> <p>c) Los titulares de las dependencias básicas del Ejecutivo, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral; los Consejeros del Poder Judicial; el Fiscal General del Estado; y</p> <p>d) ...</p>	<p>Artículo 50.- No pueden desempeñar el cargo de Gobernador:</p> <p>I. ...</p> <p>II. ...</p> <p>a) ...</p> <p>b) ...</p> <p>c) Los titulares de las dependencias básicas del Ejecutivo; los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa y del Tribunal Electoral; los Consejeros del Poder Judicial; el Fiscal General del Estado; y,</p> <p>d) ...</p>
<p>Artículo 70.- La facultad de aplicar e interpretar las leyes reside exclusivamente en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral y en el Tribunal de Justicia Administrativa, en el ámbito de su competencia y ninguna otra autoridad podrá avocarse al conocimiento de causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.</p>	<p>Artículo 70.- La facultad de aplicar e interpretar las leyes reside exclusivamente en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral y en el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, en el ámbito de su competencia y ninguna otra autoridad podrá avocarse al conocimiento de causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.</p>
<p>SECCION I Del Tribunal de Justicia Administrativa</p>	<p>Sección I Del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa</p>
<p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO</p>	<p>INICIATIVA</p>

Artículo 95.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, será órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad y perspectiva de género. Se integrará por cinco magistrados, de entre los cuales uno será su Presidente electo por sus pares, en los términos que disponga la Ley.

Tendrá competencia para dirimir y resolver, las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares.

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos; así como imponer sanciones a servidores públicos y particulares que incumplan gravemente en resoluciones del organismo garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se deberán satisfacer los mismos requisitos que señala esta Constitución para ser designado Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Poder Legislativo elegirá a los magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y observando el principio de paridad de género. Los magistrados tendrán un periodo constitucional de cinco años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos hasta en dos ocasiones. Al término de su periodo cesaran en sus funciones.

El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de los magistrados, podrá privarlos de su encargo, por las mismas causas que señala el artículo 77 de esta Constitución y determinará su retiro forzoso de conformidad con el artículo 78 de esta Constitución.

Artículo 95.- El Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, será un órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad y perspectiva de género.

Se integrará por cinco magistradas o magistrados, los que conocerán de materia de anticorrupción, responsabilidades administrativas y materia administrativa ordinaria, de entre los cuales uno será su Presidente, electo por sus pares en los términos que disponga la Ley.

Tendrá competencia para dirimir y resolver, las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares.

Será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos; así como imponer sanciones a servidores públicos y particulares que incumplan gravemente en resoluciones del organismo garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Lo anterior no será aplicable a los servidores públicos que formen parte del Poder Judicial del Estado, quienes se registrarán en términos de su propio Tribunal de Disciplina Judicial.

Para ser Magistrada o Magistrado del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, se deberán satisfacer los mismos requisitos que señala esta Constitución para ser designado Magistrada o Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

El Poder Legislativo elegirá a las magistradas o magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y observando el principio de paridad de género. Las magistradas o magistrados tendrán un periodo constitucional de nueve años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos. Al término de su periodo cesarán en sus funciones.

El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de las magistradas o magistrados, y podrá privarlos de su encargo, en términos del Título Cuarto de esta Constitución.

<p>Artículo 97.-...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Las resoluciones del Instituto son vinculatorias para los sujetos obligados. La Ley establecerá los medios de apremio para asegurar el cumplimiento de sus decisiones y, en su caso, denunciará ante el Tribunal de Justicia Administrativa a los sujetos obligados que las incumplieren. Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el Instituto y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>Artículo 97. ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Las resoluciones del Instituto son vinculatorias para los sujetos obligados. La Ley establecerá los medios de apremio para asegurar el cumplimiento de sus decisiones y, en su caso, denunciará ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa a los sujetos obligados que las incumplieren. Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el Instituto y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p>Artículo 109.- Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de Michoacán y los órganos internos de control estatales o municipales, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.</p> <p>El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los servidores públicos sanciones que consistirán en apercibimiento, amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.</p> <p>...</p>	<p>Artículo 109. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de Michoacán y los órganos internos de control estatales o municipales, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.</p> <p>El Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa impondrá a los servidores públicos sanciones que consistirán en apercibimiento, amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.</p> <p>...</p>
<p>Artículo 109 bis.- Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y, en su caso, municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.</p>	<p>Artículo 109 bis.- Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y, en su caso, municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.</p>

<p>Artículo 109 ter. ...</p> <p>I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de: Auditoría Superior de Michoacán, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Órgano de Control Interno del Ejecutivo Estatal; el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; por un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana; así como tres titulares de las contralorías municipales, electos por sus pares;</p> <p>De la II a la III. ...</p> <p>...</p>	<p>Artículo 109 ter. ...</p> <p>I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de: Auditoría Superior de Michoacán, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Órgano de Control Interno del Ejecutivo Estatal; el Presidente del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa y del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; por un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana; así como tres titulares de las contralorías municipales, electos por sus pares;</p> <p>De la II. a la III. ...</p> <p>...</p>
<p>Artículo 133.-...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de Michoacán, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de Michoacán rendirá un informe específico al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.</p>	<p>Artículo 133. ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de Michoacán, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de Michoacán rendirá un informe específico al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.</p>

<p>Artículo 134. ...</p> <p>De la I. a la IV. ...</p> <p>V....</p> <p>...</p> <p>Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>La Auditoría Superior de Michoacán deberá entregar al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los días uno de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes. Dicho informe tendrá carácter público e incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.</p> <p>VI...</p> <p>VII. Imponer los medios de apremio que establezca la ley; y derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos;</p> <p>De la VIII a la X....</p> <p>...</p>	<p>Artículo 134. ...</p> <p>De la I. a la IV. ...</p> <p>V....</p> <p>...</p> <p>Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>La Auditoría Superior de Michoacán deberá entregar al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los días uno de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes. Dicho informe tendrá carácter público e incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa;</p> <p>De la V. (sic) a la VI. ...</p> <p>VII. Imponer los medios de apremio que establezca la ley; y derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos;</p> <p>De la VIII. a la X. ...</p> <p>...</p>
--	--

<p>SIN CORRELACIÓN.</p>	<p style="text-align: center;">ARTÍCULOS TRANSITORIOS</p> <p>PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, sustituirá las funciones que desempeñaba el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>Todo lo relacionado legalmente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, será substanciado, tramitado y resuelto por el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>TERCERO. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente reforma, se seguirán sustanciando conforme a las disposiciones normativas vigentes al momento de la concurrencia de los hechos que los suscitaron.</p> <p>CUARTO. Los recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles e inmuebles del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, pasaran a formar parte desde la entrada en vigor del presente Decreto al Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>El Órgano Interno de Control y la Secretaría de Administración, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para la transferencia de dichos recursos en el ámbito de sus competencias.</p> <p>QUINTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado contará con un plazo de ciento veinte días hábiles para iniciar el proceso de designación de quienes ocuparán las titularidades de las Magistraturas que habrán de integrar el Pleno del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en los términos que establece esta Constitución.</p> <p>Una vez que el Congreso del Estado realice la designación de los cinco nuevos Magistrados que habrán de integrar el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dejaran de surtir efecto los nombramientos de los Magistrados integrantes del extinto Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>Conformado el Pleno con los nuevos titulares de las cinco Magistraturas del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, estos iniciarán el proceso para la designación de los Jueces Administrativos que integrarán ese Tribunal.</p> <p>SEXTO. El Pleno del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, deberá de emitir un programa de liquidación conforme al cual se realizarán las indemnizaciones correspondientes, tomando en consideración el tiempo restante de cada Magistrado, y de acuerdo a la suficiencia presupuestal con la que cuente el órgano constitucional autónomo, en los términos de lo establecido en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente.</p> <p>SÉPTIMO. El Congreso del Estado tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a la normativa que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Hasta en tanto se emitan nuevas disposiciones, los nuevos integrantes del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, deberán apegar sus funciones en lo que corresponda a la legislación vigente.</p> <p>OCTAVO. El Congreso del Estado deberá realizar las acciones necesarias para que se asigne dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán al Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, los recursos que le correspondían al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, esto con el objeto de que se respete la autonomía constitucional de este organismo.</p> <p>NOVENO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.</p>
-------------------------	---

La propuesta en estudio, tiene la finalidad de crear el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa en sustitución del Tribunal de Justicia Administrativa. Será un órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad y perspectiva de género.

Se integrará por cinco magistradas o magistrados, los que conocerán de materia de anticorrupción, responsabilidades administrativas y materia administrativa ordinaria, de entre los cuales uno será su Presidente. Tendrá competencia para dirimir y resolver, las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares.

Será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas. El Poder Legislativo elegirá a las magistradas o magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y observando el principio de paridad de género.

III. Consideraciones

La dimensión del Estado, parte sustancialmente de la conformación de los poderes y la distribución de competencia de los diferentes órganos de gobierno dentro de una sociedad, es así que surge la idea, como un elemento pertinente, el “Estado Social”, que parte de la particularidad en las relaciones de la actividad económica, social, política y cultural, que tienen como objeto el concertar y ordenar diversos intereses de una comunidad.

Partiendo de esto, es que se llega a la necesidad de redistribuir los bienes y servicios dentro de la esfera social con el fin de alcanzar la justicia social; de lo que se puede entender como el “Estado benefactor, promotor, distribuidor, manager, etcétera.”

En este sentido, con la amplitud de las actividades diversas de la sociedad, es que es fundamental la organización técnica con la que el Estado debe contar para coadyuvar con los fines de la justicia social, esto es, la administración pública; por lo cual, en la progresiva creación de instituciones tradicionales que se han dado con el devenir de los años, es que surgió la necesidad de crear organismos descentralizados, con carácter en algunos casos, de autónomos.

Es así que dentro de sus funciones es ejercer un control y revisión de los entes públicos, respecto a sus actividades económicas, y la parte sustancial a la distribución de sus bienes y servicios dentro del Estado.

Con el constante crecimiento del desarrollo de la administración pública, derivado de la interacción política y los alcances de

los fines sociales del Estado, es que se ha entrado de manera particular en regular la política de mercado, y las actividades propias de las autoridades.

Partiendo de esto, es que surge la necesidad de crear mecanismos de protección para los particulares y con esto, poder defender sus derechos e intereses legítimos e impedir un trasgresión frente a la administración pública.

De esta manera, se puede entender, que la justicia administrativa, son los elementos jurídicos y procesales para tutela de los particulares frente al Estado; y con ello, solucionar los conflictos en materia administrativa y los agentes públicos por medio de un proceso.

Es así que, los instrumentos que se utilizan para conformar la esencia de la justicia administrativa, es; primero, un cuerpo normativo que auxilie a los tribunales administrativos en su labor de resolver conflictos; segundo, recursos administrativos, que son los medios de impugnación que se les da al ciudadano afectado ante la conducta del servidor público; y, tercero, la responsabilidad patrimonial de las autoridades, que va encaminada a la acción que ocasiono daños y perjuicios a los particulares por parte del Estado.

De lo anterior, la redacción del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2003, enunciaba:

Artículo 113. *Las leyes sobre la responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicadas por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.*

De esto, se deriva el fundamento constitucional que dio sustento para establecer las obligaciones administrativas a los servidores públicos, acentuando los actos u omisiones que incurran.

De la reforma constitucional a nivel federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 4 de diciembre de 2006; tuvo como fin, desconcentrar las funciones que existían en la actuación de la Administración Pública de la Federación, esto, para crear elementos que mejoren los preceptos legales para combatir la corrupción e impunidad; impulsando la transparencia en la gestión pública y el desempeño honesto y eficiente de los servidores públicos.

De los elementos sustanciales de esta reforma, se estableció la figura de tribunales contencioso-administrativos, dotados de autonomía e imponer sanciones administrativas a los servidores públicos; y dirimir las controversias entre la administración pública y los particulares; dotando la facultad de imponer sanciones a los servidores públicos en materia administrativa.

De igual modo, con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha en materia de combate a la corrupción; se instauró un Sistema Anticorrupción con la finalidad de crear un sistema y ordenamiento jurídico para las responsabilidades de los servidores públicos.

En su exposición de motivos, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, fundamenta y motiva su iniciativa, realiza una reseña histórico-política respecto de la evolución de la justicia administrativa, dentro del contexto social y político de México, lo que trajo como resultado que en Michoacán, se creará, a nivel constitucional local, el Tribunal de Justicia administrativa mediante decreto de 23 de mayo de 2006, lo que obedeció al mandato contenido en el artículo 116 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue producto de una profunda reforma al Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través del mismo decreto. Refiere que en 2008 dicho Tribunal fue creado como órgano autónomo e independiente en sus resoluciones en materia administrativa.

Así entonces, refiere que como la vida del Tribunal de Justicia Administrativa ha ido a la par, tanto en su creación como en su evolución constitucional, con las reformas trascendentales al Poder Judicial, de ahí entonces concluye que, atendiendo al actual paradigma y reforma de transformadora tanto en el Poder Judicial Federal y Local, es imperante revisar y optimizar el funcionamiento del tantas veces citado tribunal especializado en materias administrativa y anticorrupción, pues el mismo actualmente presenta sobrecarga de trabajo y rezagos considerables para atender los asuntos de su competencia.

Por tanto, el Gobernador del Estado propone que la reforma relativa al Tribunal Administrativo contemple: (i) que la distribución de la carga de trabajo sea equitativa entre las cinco salas, las que deberán conocer tanto de materia administrativa como en materia anticorrupción; (ii) crear mecanismos y herramientas con la que los operadores jurídicos optimicen los tiempos de resolución de los casos; y, (iii) que la denominación de dicho órgano autónomo ahora sea Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.

El exponente concluye su propuesta de reforma mencionando que: *“la relevancia de la presente reforma no solo radica en la nueva integración y conformación del nuevo Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del estado de Michoacán de Ocampo si no en dotarlo de nuevas competencias y funcionalidades que le permitan una nueva conformación y que le permitan compensar las cargas del trabajo al interior del mismo.*

Así, ante la evolución de las necesidades y el crecimiento del Sistema de Justicia Administrativa en el Estado es que se presenta esta iniciativa con el propósito de fortalecer y mejorar el funcionamiento, las atribuciones y de garantizar en todo momento a los justiciables su derecho humano de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, la presente iniciativa pretende establecer una mayor funcionalidad del órgano, dotando a las magistradas y magistrados para que atiendan materia anticorrupción, no sólo de facultades específicas en dicha materia por lo que ve a faltas graves, sino incrementando su campo de jurisdicción al juicio administrativo, para que puedan conocer, substanciar y resolver aquellos medios de impugnación o juicios administrativos que se promuevan por la imposición de sanciones de faltas no graves, en los procedimientos de responsabilidades administrativas ante los órganos administrativos.

Además, para ser congruentes con lo señalado, se propone que los magistrados del nuevo Tribunal duren en su encargo nueve años, con lo cual se garantiza la estabilidad y el compromiso con la ciudadanía.” De ahí entonces, una vez analizada la exposición de motivos y tras estudiar el articulado propuesto, se arriba a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, resulta procedente la propuesta de reforma a los artículos 24 y 50, para establecer a los magistrados del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, como nuevos sujetos impedidos para ejercer el cargo de diputados y gobernador, pues dichos preceptos contemplaban anteriormente el catálogo de servidores públicos que no podrán ser electos diputados o gobernador, lo que debe actualizarse para armonizar dicha redacción con la actual denominación del tribunal.

Asimismo, es procedente la reforma al artículo 44, en el que se establecen las nuevas facultades del congreso elegir, reelegir, destituir, aprobar o negar solicitudes de licencia o renuncia, de los integrantes del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa.

Igualmente, es de recibo incluir en el artículo 70, que entre los órganos facultados para interpretar y aplicar las leyes, esté el nuevo Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa.

Asimismo, por los razonamientos expuestos son procedentes las reformas sustantivas a los artículos 95, 97, 109, 109 bis, 109 ter, 133 y 134 en los que se materializan los principales objetivos y motivación de la propuesta de reforma, pues ahora se establece tanto la naturaleza, competencia y funcionalidad del nuevo Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, así como la manera y requisitos para elegir a sus integrantes y en su caso la manera de reelegir a los mismos.

En tal sentido, se establecen las facultades y obligaciones de otros órganos estatales, para dar vista a dicho tribunal, cuando

detecten faltas administrativas graves o hechos de corrupción que sean materia del nuevo tribunal y la inclusión del presidente del mencionado órgano autónomo, para ser integrante del comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Concluimos las diputadas y diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, atendiendo a los términos del artículo 246 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, sometemos a su consideración el presente Dictamen.

IV. Resultado del Dictamen

De lo analizado y expuesto por estas Comisiones, se dictamina en sentido positivo con modificaciones al régimen transitorio de la Iniciativa presentada; proponiendo reformar, diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. El cuadro a continuación, enuncia la comparación entre el texto constitucional vigente y la propuesta realiza por estas Comisiones.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.	Iniciativa
<p>Artículo 24.- No podrán ser electos diputados:</p> <p>I.- ...</p> <p>II.- Los funcionarios de la Federación, los titulares de las dependencias básicas y de las entidades de la organización administrativa del Ejecutivo y los ayuntamientos, los Consejeros del Poder Judicial, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Justicia Administrativa;</p> <p>De la III a la VI. ...</p>	<p>Artículo 24.- No podrán ser electos diputados:</p> <p>I.- ...</p> <p>II.- Los funcionarios de la Federación, los titulares de las dependencias básicas y de las entidades de la organización administrativa del Ejecutivo y los ayuntamientos, los consejeros del Poder Judicial, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa;</p> <p>De la III. a la VI. ...</p>
<p>Artículo 44.- Son facultades del Congreso:</p> <p>De la I a la XXIII bis. ...</p> <p>XXIII A.- Elegir, reelegir y privar del encargo, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos;</p> <p>De la XXIII-B a la XLI. ...</p>	<p>Artículo 44.- Son facultades del Congreso:</p> <p>De la I. a la XXIII bis. ...</p> <p>XXIII A. Elegir, reelegir y destituir del encargo, a las magistradas y magistrados del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, y aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos;</p> <p>De la XXIII-B. a la XLI. ...</p>
<p>Artículo 50.- No pueden desempeñar el cargo de Gobernador:</p> <p>I. ...</p> <p>II. ...</p> <p>a) ...</p> <p>b) ...</p> <p>c) Los titulares de las dependencias básicas del Ejecutivo, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral; los Consejeros del Poder Judicial; el Fiscal General del Estado; y,</p> <p>d) ...</p>	<p>Artículo 50.- No pueden desempeñar el cargo de Gobernador:</p> <p>I. ...</p> <p>II. ...</p> <p>a) ...</p> <p>b) ...</p> <p>c) Los titulares de las dependencias básicas del Ejecutivo; los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa y del Tribunal Electoral; los Consejeros del Poder Judicial; el Fiscal General del Estado; y,</p> <p>d) ...</p>
<p>Artículo 70.- La facultad de aplicar e interpretar las leyes reside exclusivamente en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral y en el Tribunal de Justicia Administrativa, en el ámbito de su competencia y ninguna otra autoridad podrá avocarse al conocimiento de causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.</p>	<p>Artículo 70.- La facultad de aplicar e interpretar las leyes reside exclusivamente en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral y en el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, en el ámbito de su competencia y ninguna otra autoridad podrá avocarse al conocimiento de causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.</p>
<p>SECCION I</p> <p>Del Tribunal de Justicia Administrativa</p>	<p>Sección I</p> <p>Del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa</p>

<p>Artículo 95.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, será órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad y perspectiva de género. Se integrará por cinco magistrados, de entre los cuales uno será su Presidente electo por sus pares, en los términos que disponga la Ley.</p> <p>Tendrá competencia para dirimir y resolver, las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares.</p> <p>Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos; así como imponer sanciones a servidores públicos y particulares que incumplan gravemente en resoluciones del organismo garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales.</p> <p>Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se deberán satisfacer los mismos requisitos que señala esta Constitución para ser designado Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Poder Legislativo elegirá a los magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y observando el principio de paridad de género. Los magistrados tendrán un periodo constitucional de cinco años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos hasta en dos ocasiones. Al término de su periodo cesaran en sus funciones.</p> <p>El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de los magistrados, podrá privarlos de su encargo, por las mismas causas que señala el artículo 77 de esta Constitución y determinará su retiro forzoso de conformidad con el artículo 78 de esta Constitución.</p>	<p>Artículo 95.- El Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, será un órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad y perspectiva de género.</p> <p>Se integrará por cinco magistradas o magistrados, los que conocerán de materia de anticorrupción, responsabilidades administrativas y materia administrativa ordinaria, de entre los cuales uno será su Presidente, electo por sus pares en los términos que disponga la Ley.</p> <p>Tendrá competencia para dirimir y resolver, las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares.</p> <p>Será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos; así como imponer sanciones a servidores públicos y particulares que incumplan gravemente en resoluciones del organismo garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Lo anterior no será aplicable a los servidores públicos que formen parte del Poder Judicial del Estado, quienes se registrarán en términos de su propio Tribunal de Disciplina Judicial.</p> <p>Para ser Magistrada o Magistrado del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, se deberán satisfacer los mismos requisitos que señala esta Constitución para ser designado Magistrada o Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.</p> <p>El Poder Legislativo elegirá a las magistradas o magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y observando el principio de paridad de género. Las magistradas o magistrados tendrán un periodo constitucional de nueve años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos. Al término de su periodo cesarán en sus funciones.</p> <p>El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de las magistradas o magistrados, y podrá privarlos de su encargo, en términos del Título Cuarto de esta Constitución.</p>
---	--

<p>Artículo 97.-...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Las resoluciones del Instituto son vinculatorias para los sujetos obligados. La Ley establecerá los medios de apremio para asegurar el cumplimiento de sus decisiones y, en su caso, denunciará ante el Tribunal de Justicia Administrativa a los sujetos obligados que las incumplieren. Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el Instituto y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>Artículo 97. ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Las resoluciones del Instituto son vinculatorias para los sujetos obligados. La Ley establecerá los medios de apremio para asegurar el cumplimiento de sus decisiones y, en su caso, denunciará ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa a los sujetos obligados que las incumplieren. Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el Instituto y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p>Artículo 109.- Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de Michoacán y los órganos internos de control estatales o municipales, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.</p> <p>El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los servidores públicos sanciones que consistirán en apercibimiento, amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.</p> <p>...</p>	<p>Artículo 109. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de Michoacán y los órganos internos de control estatales o municipales, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.</p> <p>El Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa impondrá a los servidores públicos sanciones que consistirán en apercibimiento, amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.</p> <p>...</p>
<p>Artículo 109 bis.- Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y, en su caso, municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.</p>	<p>Artículo 109 bis.- Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y, en su caso, municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.</p>

<p>Artículo 109 ter. ...</p> <p>I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de: Auditoría Superior de Michoacán, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Órgano de Control Interno del Ejecutivo Estatal; el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; por un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana; así como tres titulares de las contralorías municipales, electos por sus pares;</p> <p>De la II a la III. ...</p> <p>...</p>	<p>Artículo 109 ter. ...</p> <p>I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de: Auditoría Superior de Michoacán, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Órgano de Control Interno del Ejecutivo Estatal; el Presidente del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa y del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; por un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana; así como tres titulares de las contralorías municipales, electos por sus pares;</p> <p>De la II. a la III. ...</p> <p>...</p>
<p>Artículo 133.-...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de Michoacán, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de Michoacán rendirá un informe específico al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.</p>	<p>Artículo 133. ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de Michoacán, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de Michoacán rendirá un informe específico al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.</p>

<p>Artículo 134. ...</p> <p>De la I. a la IV. ...</p> <p>V....</p> <p>...</p> <p>Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>La Auditoría Superior de Michoacán deberá entregar al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los días uno de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes. Dicho informe tendrá carácter público e incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.</p> <p>VI...</p> <p>VII. Imponer los medios de apremio que establezca la ley; y derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos;</p> <p>De la VIII a la X....</p> <p>...</p>	<p>Artículo 134. ...</p> <p>De la I. a la IV. ...</p> <p>V....</p> <p>...</p> <p>Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>La Auditoría Superior de Michoacán deberá entregar al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los días uno de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes. Dicho informe tendrá carácter público e incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa;</p> <p>De la V. (sic) a la VI. ...</p> <p>VII. Imponer los medios de apremio que establezca la ley; y derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos;</p> <p>De la VIII. a la X. ...</p> <p>...</p>
--	--

SIN CORRELACIÓN.	ARTÍCULOS TRANSITORIOS
	<p>PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, sustituirá las funciones que desempeñaba el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>Todo lo relacionado legalmente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, será substanciado, tramitado y resuelto por el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>TERCERO. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente reforma, se seguirán sustanciando conforme a las disposiciones normativas vigentes al momento de la concurrencia de los hechos que los suscitaron.</p> <p>CUARTO. Los recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles e inmuebles del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, pasaran a formar parte desde la entrada en vigor del presente Decreto al Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>El Órgano Interno de Control y la Secretaría de Administración, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para la transferencia de dichos recursos en el ámbito de sus competencias.</p> <p>QUINTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado contará con un plazo de ciento veinte días hábiles para iniciar el proceso de designación de quienes ocuparán las titularidades de las Magistraturas que habrán de integrar el Pleno del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en los términos que establece esta Constitución.</p> <p>Una vez que el Congreso del Estado realice la designación de los cinco nuevos Magistrados que habrán de integrar el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dejen de surtir efecto los nombramientos de los Magistrados integrantes del extinto Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>SEXTO. El Pleno del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, deberá de emitir un programa de liquidación conforme al cual se realizarán las indemnizaciones correspondientes, tomando en consideración el tiempo restante de cada Magistrado, y de acuerdo a la suficiencia presupuestal con la que cuente el órgano constitucional autónomo, en los términos de lo establecido en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente.</p> <p>SÉPTIMO. El Congreso del Estado tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a la normativa que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Hasta en tanto se emitan nuevas disposiciones, los nuevos integrantes del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, deberán apegar sus funciones en lo que corresponda a la legislación vigente.</p> <p>OCTAVO. El Congreso del Estado deberá realizar las acciones necesarias para que se asigne dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán al Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, los recursos que le correspondían al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, esto con el objeto de que se respete la autonomía constitucional de este organismo.</p> <p>NOVENO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.</p>

V. Texto Constitucional y Régimen Transitorio

Por lo expuesto anteriormente, nos permitimos poner a su consideración y aprobación el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24; LA FRACCIÓN XXIII A DEL ARTÍCULO 44; EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 50; EL ARTÍCULO 70; LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN I, DEL CAPÍTULO I, DEL TÍTULO TERCERO A; EL ARTÍCULO 95; EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97; EL PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 109; EL ARTÍCULO 109 BIS; LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 TER; ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 133; TERCERO Y SEXTO PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN V, Y LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 134, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

Único. Se reforman la fracción II del artículo 24; la fracción XXIII A del artículo 44; el inciso c) de la fracción II, del artículo 50; el artículo 70; la denominación de la Sección I, del Capítulo I, del Título Tercero A; el artículo 95; el cuarto párrafo del artículo 97; el primero y segundo párrafos del artículo 109; el artículo 109 bis; la fracción I del artículo 109 ter; último párrafo del artículo 133; tercero y sexto párrafos de la fracción V, y la fracción VII del artículo 134, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:

Artículo 24. No podrán ser electos diputados:

I. ...

II. Los funcionarios de la Federación, los titulares de las dependencias básicas y de las entidades de la organización administrativa del Ejecutivo y los ayuntamientos, los consejeros del Poder Judicial, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa;

De la III. a la VI. ...

Artículo 44. Son facultades del Congreso:

De la I. a la XXIII bis. ...

XXIII A. Elegir, reelegir y destituir del encargo, a las magistradas y magistrados del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, y aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos;

De la XXIII-B. a la XLI. ...

Artículo 50. No pueden desempeñar el cargo de Gobernador:

I. ...

II. ...

a)...

b)...

c) Los titulares de las dependencias básicas del Ejecutivo; los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa y del Tribunal Electoral; los Consejeros del Poder Judicial; el Fiscal General del Estado; y,
d)...

Artículo 70. La facultad de aplicar e interpretar las leyes reside exclusivamente en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral y en el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, en el ámbito de su competencia y ninguna otra autoridad podrá avocarse al conocimiento de causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.

Sección I

Del Tribunal en Materia

Anticorrupción y Administrativa

Artículo 95. El Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, será un órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad y perspectiva de género.

Se integrará por cinco magistradas o magistrados, los que conocerán de materia de anticorrupción, responsabilidades administrativas y materia administrativa ordinaria, de entre los cuales uno será su Presidente, electo por sus pares en los términos que disponga la Ley.

Tendrá competencia para dirimir y resolver, las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares.

Será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos; así como imponer sanciones a servidores públicos y particulares que incumplan gravemente en resoluciones del organismo garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Lo anterior no será aplicable a los servidores públicos que formen parte del Poder Judicial del Estado, quienes se registrarán en términos de su propio Tribunal de Disciplina Judicial.

Para ser Magistrada o Magistrado del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, se deberán satisfacer los mismos requisitos que señala esta Constitución para ser

designado Magistrada o Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

El Poder Legislativo elegirá a las magistradas o magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y observando el principio de paridad de género. Las magistradas o magistrados tendrán un periodo constitucional de nueve años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos. Al término de su periodo cesarán en sus funciones.

El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de las magistradas o magistrados, y podrá privarlos de su encargo, en términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Artículo 97. ...

...
...

Las resoluciones del Instituto son vinculatorias para los sujetos obligados. La Ley establecerá los medios de apremio para asegurar el cumplimiento de sus decisiones y, en su caso, denunciará ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa a los sujetos obligados que las incumplieren. Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el Instituto y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

...
...

Artículo 109. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de Michoacán y los órganos internos de control estatales o municipales, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

El Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa impondrá a los servidores públicos sanciones que consistirán en apercibimiento, amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

...

Artículo 109 bis. Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y, en su caso,

municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.

Artículo 109 ter. ...

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de: Auditoría Superior de Michoacán, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Órgano de Control Interno del Ejecutivo Estatal; el Presidente del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa y del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; por un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana; así como tres titulares de las contralorías municipales, electos por sus pares;
De la II. a la III. ...

...

Artículo 133. ...

...
...

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de Michoacán, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de Michoacán rendirá un informe específico al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.

Artículo 134. ...

De la I. a la IV. ...

V. ...

...

Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

...

...

La Auditoría Superior de Michoacán deberá entregar al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los días uno de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre

la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes. Dicho informe tendrá carácter público e incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa;

De la V. (sic) a la VI. ...

VII. Imponer los medios de apremio que establezca la ley; y derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos;

De la VIII. a la X. ...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, sustituirá las funciones que desempeñaba el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.

Todo lo relacionado legalmente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, será substanciado, tramitado y resuelto por el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.

Tercero. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente reforma, se seguirán sustanciando conforme a las disposiciones normativas vigentes al momento de la concurrencia de los hechos que los suscitaron.

Cuarto. Los recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles e inmuebles del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, pasaran a formar parte desde la entrada en vigor del presente Decreto al Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Órgano Interno de Control y la Secretaría de Administración, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para la transferencia de dichos recursos en el ámbito de sus competencias.

Quinto. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado contará con un plazo de ciento veinte días hábiles para iniciar el proceso de designación de quienes

ocuparán las titularidades de las Magistraturas que habrán de integrar el Pleno del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en los términos que establece esta Constitución.

Una vez que el Congreso del Estado realice la designación de los cinco nuevos Magistrados que habrán de integrar el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dejarán de surtir efecto los nombramientos de los Magistrados integrantes del extinto Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.

Sexto. El Pleno del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, deberá de emitir un programa de liquidación conforme al cual se realizarán las indemnizaciones correspondientes, tomando en consideración el tiempo restante de cada Magistrado, y de acuerdo a la suficiencia presupuestal con la que cuente el órgano constitucional autónomo, en los términos de lo establecido en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente.

Séptimo. El Congreso del Estado tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a la normativa que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Hasta en tanto se emitan nuevas disposiciones, los nuevos integrantes del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, deberán apegar sus funciones en lo que corresponda a la legislación vigente.

Octavo. El Congreso del Estado deberá realizar las acciones necesarias para que se asigne dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán al Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, los recursos que le correspondían al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, esto con el objeto de que se respete la autonomía constitucional de este organismo.

Noveno. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 6 seis días del mes de noviembre de 2024 dos mil veinticuatro.

Comisión de Puntos Constitucionales: Dip. Emma Rivera Camacho, *Presidenta*; Dip. Eréndira Isauro Hernández, *Integrante*; Dip. J. Reyes Galindo Pedraza, *Integrante*; Dip. Octavio Ocampo Córdova, *Integrante*; Dip. David Martínez Gowman, *Integrante*.

Comisión de Justicia: Dip. Anabet Franco Carrizales, *Presidenta*; Dip. David Martínez Gowman, *Integrante*; Dip. Vicente Gómez Núñez, *Integrante*; Dip. Julianna Bugarini Torres, *Integrante*; Dip. Marco Polo Aguirre Chávez, *Integrante*.

Es cuanto, Presidente.

Presidente:

Toda vez que el dictamen ha recibido primera lectura y es presentado con trámite de dispensa de su segunda lectura, esta Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI y 246 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, somete en votación económica si es de dispensarse el trámite de su segunda lectura.

Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano, y pido a la Segunda Secretaría dar cuenta con la votación... Levanten la mano, por favor... Muchas gracias.

¿Votos en contra?...

¿Abstenciones?...

Segunda Secretaría:

Le informo, Presidente: Treinta y siete votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

Atendida su instrucción.

Presidente:

Gracias.

Aprobado: Se dispensa el trámite de su segunda lectura.

Se somete a discusión; por lo que si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo a fin de integrar los listados correspondientes...

¿En contra?... ¿Alguien más en contra?...

¿A favor?... ¿Van a intervenir a favor?...

Solamente tenemos una intervención de voto en contra.

Tiene el uso de la palabra la diputada Vanessa Caratachea, hasta por cinco minutos, en contra.

*Intervención de la diputada
Ana Vanessa Caratachea Sánchez*

Hoy leímos mucho y ojalá así también sea en el Presupuesto.

Bueno, con su permiso, Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

Bien dicen que no hay que llegar primero, sino saber llegar. Todo proyecto jurídico siempre es perfectible y es algo que se tiene que tener presente, y en este caso es algo que tenemos que destacar.

Las mejoras que se requieren no son solamente en un cambio de nombre, como se lo ha dicho, sino en el sustento de la importancia de contar con un tribunal que realmente combata la corrupción de los servidores públicos.

Se debe de tener claro que la justicia conlleva a la aplicación de la ley, más no ser un poder sometido a otro poder, con un argumento popular que hasta el cansancio se ha repetido y que en este proyecto, pues, ¿adivinen qué?... No se cumple.

Reconozco la labor que hace actualmente el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado. Sin embargo, este órgano que ayuda a los ciudadanos mediante la Defensoría Jurídica frente a los actos de autoridad, se debió de fortalecer de manera distinta, en específico esta figura.

Decían que antes los magistrados se querían perpetuar en el poder, y lo que hoy proponen es prolongar su duración de nueve años con posibilidad de reelección. Es algo que nos debe inquietar, toda vez que las dos terceras partes de los presentes de este Pleno serán quienes designen, por lo cual esto debe de obedecer a un tema totalmente técnico y jurídico, dejados de un lado los acuerdos políticos.

Es propicio decir que el complemento a este proyecto fue lo concerniente a la reforma al Poder Judicial, pero en este dictamen lo interesante es que en la elección de los magistrados no es por voto popular, ni por insaculación, es por un comité de evaluación, con gran mayoría del Poder Ejecutivo, lo cual no va en sincronía con lo que se aprobó a nivel federal.

Otro tema que queda inconcluso es lo que respecta al Código de Justicia Administrativa, dejando 90 extensos días para que se realicen las reformas respectivas, lo que sería un limbo jurídico con el cambio inmediato del tribunal actual. Mientras se armonizan, no quedan claro los alcances que se tendrían.

Consideramos de suma relevancia que esto se debe de abordar, ya que entre las funciones del Tribunal

de Justicia Administrativa son las de imponer sanciones a los servidores públicos con este tipo de responsabilidades, así como fincar el pago de las indemnizaciones y sanciones que afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos.

Y algo muy importante que no se ha querido destacar es que también sancionan a servidores públicos por omisiones en materia de acceso a la información pública, lo cual es muy relevante. De aquí que reiteramos que no se puede seleccionar o designar a cualquiera que cumpla con los requisitos, sino que se debe también ponderar que no actúen con tendencia política, sino que persista la imparcialidad en su actuar.

Y es que este tribunal, con su naturaleza, guarda una relación directa importante entre los particulares, o sea, las y los ciudadanos, y las controversias que se suscitan con el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, es un escudo de defensa entre estos casos, y está a punto de verse un poco indeleble, por lo cual se debe de cuidar también en su momento lo que conlleve a la reelección, puesto que durarán 18 años en su cargo, puede pasar.<

¿Qué elementos serían los que condenarían, en dado caso? ¿Realmente actuarían con imparcialidad hacia la ciudadanía o tendrían que cumplir con quienes pueden votar por ellos? No es cosa menor, porque los actos de corrupción pueden prestarse tanto en el ámbito estatal, municipal. ¿Entonces, qué posibilidades tiene un ciudadano común para ser defendido en este ámbito, además de la Defensoría?

Es muy delicado lo que está a punto de ser votado. No es solamente un cambio de nombre, no es solamente un ajuste de atribuciones, blindar jurídicamente que no se debe de intervenir por una parte de un poder sobre otro. Es como si el Congreso propusiera el desaparecer secretarías, dependencias de otro poder. Si el mal mayor es la corrupción, entonces centremos nuestro esfuerzo en eso, en generar esquemas de transparencia, de denuncia y certeza jurídica en el ámbito administrativo; de dicho paso, que en lo que suele haber más quejas.

De igual forma, en fortalecer los organismos de transparencia y rendición de cuentas en el Estado. La corrupción es algo que tenemos que erradicar de raíz y eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero nos quedan bastantes dudas si este proyecto es el adecuado para hacerlo. Este Poder también debe tener presente que en el Artículo Quinto

Transitorio se extinguen los nombramientos de las y los magistrados que este que este Pleno hizo en cumplimiento constitucional; es decir, el tiempo de su encargo desaparece de inmediato.

Además, una preocupación sustancial es lo que conlleva a las y los trabajadores de este Tribunal, a quienes deben de respetárselo, bien lo dice en el dictamen, y pugnamos para que así sea.

Por lo ya expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en contra de esta reforma, que es oficialista, y como ciudadana manifiesto mi preocupación por el poder que pudieran llegar a tener las y los magistrados, porque en un esquema de pesos y contrapesos podrían estar sujetos a su actuar a una mayoría de una legislatura, sea de un color o sea de otro.

Esta situación, en periodos próximos, se puede revertir, porque nadie está dispuesto a que se le pisoteen sus derechos en pro de una ideología transformadora. De igual forma, solicitamos se nos permita participar en comisiones en el proceso de armonización legislativa.

Termino, Presidente...

Y sobre todo, se informe a la ciudadanía sobre los alcances de esta reforma, porque a fin de cuentas serán los beneficiados o los afectados. Nuestro Estado sigue ocupando lugares significativos en el tema de corrupción, pero no podemos claudicar ante ella. Nos parece significativo, pero insuficiente este cambio. La profesionalización, la capacidad y la transparencia en el proceso de selección será el ejemplo que debemos dar, y regresar la confianza a este tribunal.

Pueden desaparecer los tribunales, pueden correr magistrados y jueces, pueden cambiarle el nombre; pero les recuerdo que este Poder tiene la gran responsabilidad de ser representativo de las demandas populares de todas y todos los michoacanos, y uno de sus principales clamores es la justicia.

**Aquí se los dejamos de tarea.
Muchas gracias.**

Presidente:

Gracias.

Se somete a su consideración, en votación económica, si el presente dictamen se encuentra

suficientemente discutido. Y se pide a la Segunda Secretaría tomar la votación e informar a esta Presidencia su resultado...

[Una observación]...

Estamos en votación para ver si está suficientemente discutido...

[Que se vote. Me gustaría hacer una observación nada más]

A ver, tiene el uso de la palabra...

[Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta]:

Sí, solamente para que se pudiera tomar en cuenta, no sé si todavía en este dictamen o en los subsecuentes. Yo noto algunas fallas, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo: para magistradas y magistrados, en todo se menciona, pero para diputados, no, y tampoco para gobernador. Y la verdad, yo creo que debemos ya empezar; si estamos modificando todas las leyes para lenguaje inclusivo, pues que lo pudiéramos considerar.

Por ejemplo, en el artículo 44 que vamos a aprobar, sí dice magistradas y magistrados, pero inmediatamente viene el 50, y ahí solamente menciona Gobernador, y así está todo el dictamen.

*Entonces nada más es eso, Presidente, si se pudiera hacer, creo que vale la pena no sacarlo así; pero si no, pues que decida la Comisión. **Gracias.***

Presidente:

Muy bien. Se somete a su consideración, en votación económica, si el presente dictamen se encuentra suficientemente discutido. Y se pide a la Segunda Secretaría tomar la votación e informar a esta Presidencia su resultado.

Quienes estén a favor de que está suficientemente discutido, levanten la mano... Muchas gracias.

¿Votos en contra?...

¿Abstenciones?...

Aprobado: Se considera suficientemente discutido el dictamen.

Por lo que se somete en votación nominal en lo general, solicitándoles que al votar manifiesten su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan. Y se instruye a la

Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia su resultado.

[VOTACIÓN NOMINAL]

Abraham Espinoza Villa, *a favor.*
 David Martínez Gowman, *a favor.*
 Xóchitl Gabriela Ruiz González, *a favor.*
 Alfredo Anaya Orozco, *a favor.*
 Sandra María Arreola Ruiz, *a favor.*
 Teresita de Jesús Herrera Maldonado, *en contra.*
 Alfonso Janitzio Chávez Andrade, *en contra.*
 Adriana Campos Huirache, *a favor.*
 Santiago Sánchez Bautista, *a favor.*
 Jaqueline Avilés Osorio, *a favor.*
 Alejandro Iván Arévalo Vera, *a favor.*
 Giulianna Bugarini Torres, *a favor.*
 Sandra Olimpia Garibay Esquivel, *a favor.*
 Nalleli Julieta Pedraza Huerta, *sí, a favor.*
 María Fabiola Alanís Sámano, *a favor.*
 J. Reyes Galindo Pedraza, *a favor.*
 Hugo Ernesto Rangel Vargas, *a favor.*
 Baltazar Gaona García, *a favor.*
 Brissa Ileri Arroyo Martínez, *a favor.*
 Octavio Ocampo Córdova, *a favor.*
 Eréndira Isauro Hernández, *a favor.*
 Marco Polo Aguirre Chávez, *a favor.*
 Anabet Franco Carrizales, *a favor.*
 Antonio Salvador Mendoza Torres, *a favor.*
 Ana Belinda Hurtado Marín, *a favor.*
 Juan Pablo Celis Silva, *a favor.*
 Grecia Jennifer Aguilar Mercado, *a favor.*
 Víctor Manuel Manríquez González, *a favor.*
 Carlos Alejandro Bautista Tafolla, *a favor.*
 Conrado Paz Torres, *a favor.*
 Vicente Gómez Núñez, *a favor.*
 Ana Vanessa Caratachea Sánchez, *en contra.*
 Belinda Iturbide Díaz, *a favor.*
 Melba Edeyanira Albavera Padilla, *a favor.*
 ...[Inaudible]...
 Juan Antonio Magaña de la Mora, *a favor.*

[Comentarios vertidos al momento de emitir su voto]:

DIP. TERESITA DE JESÚS HERRERA MALDONADO:

Por las inconsistencias contenidas en el presente dictamen, por seguir inmiscuyéndose en la autonomía de los poderes, por el proceso viciado en la elección de los magistrados y porque Michoacán ocupa el segundo lugar en corrupción en el periodo 2021 a 2023, queda claro que, extinguiendo un tribunal, no es la solución y se debe empezar por la casa. Por esa razón, mi voto es en contra.

DIP. SANDRA OLIMPIA GARIBAY ESQUIVEL:

Sandra Garibay, a favor. Y me reservo el artículo 95 párrafo sexto.

DIP. J. REYES GALINDO PEDRAZA:

El Tribunal de Justicia Administrativa no es otro Poder, es un organismo constitucionalmente autónomo. Parece que hay una confusión técnico-jurídica. No se extingue, se reforma, se combate de manera frontal la corrupción. Reyes Galindo, a favor.

DIP. ANA VANESSA CARATACHEA SÁNCHEZ:

En contra de un dictamen con inconsistencias, Ana Vanessa Caratachea Sánchez, totalmente en contra.

Segunda Secretaría:

Le informo, Presidente: **(33) Treinta y tres votos a favor, (3) tres votos en contra y (0) cero abstenciones.**

Atendida su instrucción.

Presidente:

Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Sandra Olimpia Esquivel, que reservó el artículo 95 párrafo sexto; tiene el uso de la palabra.

*Intervención de la diputada
Sandra Olimpia Garibay Esquivel*

Gracias, Presidente.

Con su permiso:

Estimados y estimadas compañeras, un principio fundamental que ha guiado las democracias sólidas lo ha sido la no reelección. Este concepto podría parecer sencillo a primera vista, pero tiene profundas implicaciones para nuestra sociedad y nuestro futuro.

La no reelección establece un límite a los mandatos, garantizando que no se perpetúen en el poder. Es importante precisar el número de ocasiones a la que una magistrada o magistrado tiene oportunidad de reelegirse para evitar interpretaciones erróneas.

No está demás decir que será por única ocasión, y no dar pie en el texto normativo a futuros problemas. Me reservo el artículo 95 párrafo sexto para que quede: *El Poder Legislativo elegirá a las magistradas o magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Congreso del Estado, mediante una convocatoria pública y observando el principio de paridad de género. Las magistradas o magistrados tendrán un periodo constitucional de nueve años en el ejercicio del*

cargo y podrán ser reelectos por única ocasión. Al término de su periodo, cesarán en sus funciones.

Es cuanto, Presidente.

Presidente:

Gracias, diputada. Sírvase entregar este proyecto a esta Mesa Directiva...

Se le solicita a la Tercera Secretaría dar lectura, por favor.

Tercera Secretaría:

Con su permiso, Presidente:

El Poder Legislativo elegirá a las magistradas o magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Congreso del Estado, mediante una convocatoria pública y observando el principio de paridad de género. Las magistradas o magistrados tendrán un periodo constitucional de nueve años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos por única ocasión. Al término de su periodo, cesarán en sus funciones.

Es cuanto, Presidente.

Presidente:

Gracias, diputada.

Se somete a discusión al proyecto de artículo reservado; quienes deseen intervenir, háganlo del conocimiento a esta Presidencia a fin de integrar los listados del debate...

Toda vez que ninguna diputada o diputado desea intervenir, se somete en votación nominal el proyecto del artículo, por lo que se les pide que al votar manifiesten su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. Se solicita a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esta Presidencia el resultado.

Diputados, diputadas, les recuerdo que estamos en votación nominal, por favor...

[VOTACIÓN NOMINAL]

J. Reyes Galindo Pedraza, *a favor.*
Adriana Campos Huirache, *a favor.*
Hugo Ernesto Rangel Vargas, *a favor.*
Baltazar Gaona García, *a favor.*
Brissa Ileri Arroyo Martínez, *sí, a favor.*
Octavio Ocampo Córdova, *a favor.*
Eréndira Isauro Hernández, *a favor.*
David Martínez Gowman, *a favor.*

Sandra María Arreola Ruiz, *a favor*.
Teresita de Jesús Herrera Maldonado, *abstención*.
María Fabiola Alanís Sámano, *a favor*.
Nalleli Julieta Pedraza Huerta, *sí, a favor*.
Antonio Salvador Mendoza Torres, *a favor*.
Jaqueline Avilés Osorio, *a favor*.
Alejandro Iván Arévalo Vera, *a favor*.
Giulianna Bugarini Torres, *abstención*.
Sandra Olimpia Garibay Esquivel, *a favor*.
Emma Rivera Camacho, *a favor*.
Ana Belinda Hurtado Marín, *a favor*.
Grecia Jennifer Aguilar Mercado, *a favor*.
Víctor Manuel Manríquez González, *a favor*.
Carlos Alejandro Bautista Tafolla, *a favor*.
Conrado Paz Torres, *a favor*.
Vicente Gómez Núñez, *a favor*.
Ana Vanessa Caratachea Sánchez, *a favor*.
Belinda Iturbide Díaz, *a favor*.
Melba Edeyanira Albavera Padilla, *a favor*.
Santiago Sánchez Bautista, *a favor*.
...[Inaudible]...
...[Inaudible]...
Juan Antonio Magaña de la Mora, *a favor*.

Segunda Secretaría:

Le informo, Presidente, que hubo **(27) Veintisiete votos a favor, (0) cero en contra y (4) cuatro abstenciones.**

Cumplida su instrucción.

Presidente:

Aprobado en lo particular el artículo 95 párrafo sexto.

Aprobado en lo general y en lo particular, por la Septuagésima Sexta Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 24; la fracción XXIII A del artículo 44; el inciso c) de la fracción II del artículo 50; el artículo 70; la denominación de la Sección I, del Capítulo I, del Título Tercero A; el artículo 95; el cuarto párrafo del artículo 97; el primero y segundo párrafos del artículo 109; el artículo 109 bis; la fracción I del artículo 109 ter; último párrafo del artículo 133; tercero y sexto párrafos de la fracción V, y la fracción VII, del artículo 134; todos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Elabórese el decreto y procédase en sus términos.

Agotado el orden del día se levanta la sesión.
[Timbre]

CIERRE: 15:23 horas..



www.congresomich.gob.mx